

Revista Insurrección

Edición No.547

Septiembre/19/2016



SUMARIO



EDITORIAL 4

La Moneda de la Paz

CARICATURA 9

Pedagogía del Posconflicto

Autor: MILXHORA

El Círculo Vicioso de la Violencia 10

Autor: Andrés Vásquez / Delegación de Paz

La Salud en Colombia: Una Enferma Terminal 15

Autor: Gabriel Antonio Gaitán

Carta a Nairo Alexander Quintana Rojas, El Conquistador de Europa 18

Autor: Sol María Gaitán

El 36° Aniversario del Nacimiento del Frente Domingo Laín del ELN 22

Autor: Frente de Guerra Oriental

CHOCÓ, Entre la Mentira y el Abandono 24

Autor: Frente de Guerra Occidental



La Moneda de **La Paz**

Hoy el país se encuentra con gran expectativa, esperando el inicio de la implementación de los Acuerdos de La Habana, sin embargo, es válido interrogarnos por el impacto real de dichos acuerdos en la cotidianidad del pueblo colombiano y es ahí donde nos estrellamos con un sin número de paradojas e incertidumbres, que revelan otras intenciones del régimen y una vez más queda en duda su voluntad de paz y de alcanzar una solución política.

La moneda de la paz evidencia grandes contrasentidos, pues no hay correspondencia de la cara que se anuncia con los Acuerdos de La Habana y la cara espantosa de la realidad colombiana.

Siendo el Estado el responsable de masacrar y desplazar para luego legalizar territorios y entregarlos a los terratenientes y al interés extranjero, además de montar el paramilitarismo y financiarlo con el narcotráfico, es inadmisibles que fruto de unos acuerdos entre partes iguales, ahora el Estado resulte exculpado de sus respon-

sabilidades en el genocidio y la insurgencia sea mostrada como la causante de los males históricos del país. Si bien se acordó la creación de una comisión histórica de la verdad, ésta nunca logró ponerse de acuerdo y emitir veredictos sobre las responsabilidades de cada parte.

Se deja impune el terrorismo de Estado, aun cuando la misma ONU en uno de sus informes responsabilizó al Estado colombiano de causar el 80 por ciento de la violencia en el conflicto armado, ya sea por sus operativos militares de tierra

arrasada, o por la guerra sucia encubierta, o por el exterminio social encomendado al paramilitarismo. Mientras la insurgencia ha causado el 20 por ciento, resistiendo ante dicha criminalidad estatal e intentando frenar la violencia en contra de las comunidades.

Sin cambiar nada, ahora se evaporan las causas que originan el conflicto social y el alzamiento armado, muestra de ello es que para los negociadores del gobierno, la rebelión sigue estando tipificada como un delito y no como un derecho ante

la violencia impuesta de los poderosos. Sin importar que solamente el hecho de iniciar una negociación con la insurgencia, de manera implícita es reconocer su legitimidad como un contradictor político beligerante.

Esta ambigüedad en el concepto y tratamiento del derecho a la rebelión, permite que el Estado manipule la opinión pública, presentando que el gran logro del proceso de paz es quitarle las armas a una guerrilla que perdió sus fines políticos y eludiendo el debate de ideas que permita consensuar un nuevo pacto social.

En el tema de tierras sigue la ambivalencia, por un lado se pacta en la Habana las intenciones de adelantar una Reforma Rural Integral, pero la realidad nos muestra las verdaderas intenciones del gobierno de Santos con la reglamentación de la ley de Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social), que plantea extender el latifundio en zonas apartadas de los centros urbanos para ser explotados por manos privadas nacionales o extranjeras, con zonas francas para no pagar impuestos.

Las Zidres son auspiciadas por el Ministerio de Agricultura, que es el mismo que dispondrá de

las tierras para el 'Fondo de Tierras' previsto en el Acuerdo de La Habana, dando prioridad a la asignación de tierras a las empresas privadas, desconociendo a los campesinos. Así mismo, a sangre y fuego se sigue impidiendo el retorno de los campesinos desterrados. De manera que las instituciones y las leyes siguen siendo pensadas bajo los intereses del capital y con el fin de perpetuar el saqueo y la explotación.

Se anunció con gran fervor el acuerdo sobre participación política y garantías para la oposición, y una vez más el régimen juega en contravía de lo prometido y previniendo el aumento de la conflictividad popular y la protesta social, Santos arremete con duros golpes, primero con anuncios sobre el aumento del pie de fuerza y mayor presupuesto para el escuadrón de la muerte Esma, acto seguido las luchas de campesinos, indígenas, negros, estudiantes, jóvenes y demás sectores sociales son reprimidas de forma cruel bajo un tratamiento de guerra, que les permite la ley de seguridad ciudadana.

Sumado a esto se sanciona el nuevo código de policía, que impide el libre ejercicio de la movilización, la protesta social y restringe las libertades civiles. Los

últimos avances de las fuerzas militares y su nueva doctrina de guerra junto con la vinculación de Colombia a la OTAN, dejan claro que la paz está muy lejana. El Estado excluyente y militarista se fortalece y no existen garantías para la oposición política, así le otorguen, temporalmente, unos pocos escaños parlamentarios a los exguerrilleros desarmados.

Otra concesión que se le hace al Estado, se da frente a los incumplimientos de los acuerdos, dado que se establecen drásticas sanciones penales para los desmovilizados, pero no queda ninguna cláusula que penalice al Estado si incumple. Para la muestra, tenemos que 17 días después de la firma del cese el fuego bilateral y definitivo, el ejército colombiano lo violó, pero ningún mando resultó responsable o sancionado. Luego de que las FARC dejen las armas por completo, muy seguramente los incumplimientos de los gobiernos de turnos no serán castigados por la ONU, pasará lo mismo que sucede en Ruanda, Israel, Palestina, Siria, Libia y demás países donde la impunidad, el incumplimiento y la falta de seriedad de los Estados campea sin Dios ni ley.

Con lo dicho anteriormente, el régimen está interrogado en su



voluntad de cumplir y si la tuviera está limitado para hacerlo, pues la característica histórica de esta oligarquía siempre ha sido el servilismo a los intereses del imperialismo y el capital extranjero.

Con la serie de Tratados de Libre Comercio; con el consenso de Washington, las imposiciones de la OCDE, el FMI o el BM; con el acuerdo militar del 2009, donde toda Colombia queda a disposición de los Estados Unidos, instalando 7 bases militares gringas ilegales en nuestro territorio; con el acuerdo de cooperar con la OTAN; el gobierno nacional queda limitado para cumplir lo pactado en La Habana.

Pareciera que la paz de Colombia, queda al golpe de suerte

de una moneda que se lanza al aire, y, el poder mediático crea la ilusión que la moneda va a caer favorable al pueblo, pero la oligarquía, que es la dueña de la moneda, no le apuesta al azar, sino que se asegura de ganar siempre y por eso la moneda tiene su misma cara por ambos lados.

La realidad colombiana, como una moneda, tiene dos caras, la del poder oligárquico, que pregona la paz sólo como el desarme de la guerrilla, mientras mantiene todos sus privilegios, y, la cara del pueblo que lucha por empoderarse, construyendo la paz con transformaciones estructurales de la sociedad y el Estado, que permitan, la dignidad, la soberanía, la equidad y la felicidad para todas y todos.



El Círculo Vicioso De la Violencia

La historia tiende a ser circular, y son más las veces que se repite como tragedia que como comedia.

"2016: Año de la Paz". Así lo ha pregonado a los cuatro vientos el gobierno colombiano. Suena tan esperanzadora la consigna, que llega a parecerse a un decreto.

El 29 de agosto de 2016, Colombia despierta con dos noticias que marcan el signo del momento político que vivimos. La primera, la declaración del inicio formal de la tregua definitiva entre el gobierno y las FARC. La segunda, la noticia del asesinato de tres ambientalistas en el Cauca y de cuatro indígenas del pueblo Awá en Nariño. Pocos días después, mientras dormía, una pareja fue incinerada dentro de su casa, por hombres armados vestidos de negro. El 8 de septiembre, fue asesinada Cecilia Coicue, lideresa de Marcha Patriótica, en Corinto Cauca.

Si a éstas muertes les sumamos los 36 defensores de Derechos Humano, al 13 de septiembre llegan a 51 los líderes asesinados en lo que va del 2016, y más de 116 activistas de la Marcha Patriótica asesinados en el transcurso de los últimos dos años, así se compone el cuadro del momento que vivimos. Hasta le podríamos dar un título: "Tregua con la guerrilla y guerra encubierta contra el pueblo."



No es la primera vez que esto sucede en la larga y complicada historia de la guerra de nuestro país.

Corría el año 1984, y, al igual que el presente, fue decretado por el gobierno de Belisario Betancourt, como "El Año de la Paz". Había una tregua con el M-19 y las FARC, en dos procesos de negociación que se desarrollaban paralelamente. Y fue justamente en medio de esa tregua con la insurgencia que se disparó la violencia política contra los movimientos sociales y campesinos de la época.

En enero de 1984, 100 unidades de la Policía Nacional, acompañados por destacamentos del Batallón Pichincha, desalojaron violentamente a 150 familias

indígenas y de afrodescendientes que ocupaban la finca de Lopez-Adentro en el Cauca. El saldo trágico fue de 4 muertos, 43 heridos y la detención arbitraria de otros 42. Luego, en noviembre de ese mismo año fue asesinado en Santander de Quilichao, el padre Álvaro Ulcué Chocué, primer sacerdote indígena de Colombia, fundador de la "teología indígena", y luchador por el derecho a la tierra y la autonomía de los pueblos indios. Dos agentes del F2, quienes habían sido contratados por un terrateniente de la región, fueron los responsables. El crimen, como tantos otros cometidos contra campesinos e indígenas en 1984, quedó impune. En respuesta, el Comando Armado Quintín Lame se tomó



por asalto al Ingenio Castilla en noviembre y ejecutaron la toma armada de Santander de Quilichao, en enero 1985.

La contrarrevolución preventiva

La contrarrevolución en Colombia siempre ha tenido un carácter preventivo. Desde mucho antes de la Revolución Cubana, de la Guerra Fría, incluso mucho antes que existieran las guerrillas en Colombia se ha perseguido las luchas sociales. La oligarquía colombiana toma muy a pecho el viejo refrán que reza que es mejor prevenir que curar. No sólo se atacan a los movimientos porque presentan amenazas a los intereses de las élites del país hoy, sino también porque podrían hacerlo mañana.

A la clase dirigente de Colombia la caracterizan dos cosas: la primera es su singular mezquindad, dispuesta a hacer todo lo posible para no tener que ceder en sus privilegios, para evitar cualquier tipo de reforma, para no tener que compartir ni la riqueza ni el poder. En todos los países de América Latina han habido revoluciones que han modificado la composición de las clases dominantes, menos en Colombia, donde nunca se ha dado una ruptura oligárquica. En más de 200 años de vida republicana, ha sido la misma casta, con la misma sangre, que ha dominado el país.

La mezquindad de las élites se evidencia como nunca con las famosas "líneas rojas" intocables, que impone en las negociaciones con la FARC. No se puede

tocar ni el modelo económico, ni el régimen político, ni las fuerzas armadas, ni el régimen de propiedad. Es decir, nada de lo que realmente vale la pena, de lo que realmente tiene que ver con los orígenes de nuestro conflicto social y armado.

La segunda característica de la clase dirigente es su predisposición casi fanática por recurrir a la violencia, para sostener su ignominiosa dominación. La oligarquía ha recurrido al uso de la fuerza y las armas (de forma abierta y encubierta, legal e ilegal, militar y paramilitar), para sostenerse en el centro del poder y el privilegio.

Ha creado un ejército del desproporcionado tamaño de casi medio millón de efectivos, y auspiciado los infames ejércitos paramilitares para que siem-

bren terror desde las sombras. ¿La justificación? Primero fueron los liberales, luego los comunistas, seguido por los guerrilleros, luego vino el terrorismo, el narcotráfico, los indios, los negros, los estudiantes, los sindicalistas, los periodistas, los ambientalistas, los defensores de Derechos Humanos. En fin, la violencia de la oligarquía es despiadada y tiene su sello de clase.

Pero las anteriores justificaciones para la violencia son pretextos. La verdadera razón detrás de tanta muerte es que la violencia ha sido la forma predilecta de acumular poder y riqueza, de dominar a las personas y los territorios, de sostener su ostentoso imperio. Una mirada pausada y detenida de la historia de Colombia demuestra que donde quiera que hubo

posibilidad de ganancia, donde quiera que hubo riqueza, hubo guerra. Trátese de oro, caucho, petróleo, carbón, esmeraldas, banano, palma aceitera o coca. Guerra y acumulación van de la mano, y por eso le cuesta tanto a la clase dominante separar la violencia de la política.

¿Cómo se explica que, aún después de haber firmado la desaparición de las FARC, no existe plan alguno para reducir el tamaño o presupuesto del ejército de medio millón de soldados, o, lanzar al basurero de la historia la nefasta doctrina militar que considera como "enemigo interno" a toda expresión de oposición política? Y en vez de reducir las fuerzas armadas, se agrandan y se les asigna más presupuesto y se le ofrecen servicios a la OTAN, para matar a los pobres del Medio Oriente, Asia Central y el Norte de África, como si no le bastara con matar a los de Colombia y estar interviniendo en la desestabilización de los gobiernos vecinos.

Tregua para el pueblo

Las estadísticas de la guerra de Colombia son contundentes: quienes ponen la vasta mayoría de los muertos no son ni los combatientes de la guerrilla, ni los soldados del ejército nacional, sino el pueblo y las comunidades. Ha sido así durante todo el siglo XX.

La perversión de habilitar una tregua con la insurgencia, mientras se sostiene la guerra abierta y encubierta contra el movimiento social, desarmado, puede resultar incompresible para muchas sociedades y culturas del mundo. Pero eso hace parte de nuestra historia patria.

La trágica paradoja del conflicto colombiano es que el gobierno debería invertir su disposición a pactar treguas, pues si se decidiera a efectuar una tregua con la sociedad, la tregua con la guerrilla se daría con mayor facilidad.

Si realmente queremos la paz de Colombia, el gobierno debe empezar por decretar la tregua definitiva para el movimiento social. Así comenzamos a sacar la violencia de la política.



La Salud en Colombia: Una Enferma Terminal

Las quiebras de las Empresas Promotoras de Salud (EPS)

Luego de casi cuatro años de una Fiscalía haciéndose la ciega, sorda y muda, por fin se empieza a mover la investigación en contra de Carlos Palacino (quien disfruta de su botín en Estados Unidos), por la quiebra de la EPS Salucoop y el robo de recursos y la apropiación de más de 1,4 billones de pesos. Es claro que el exfiscal Montealegre se hizo el pendejo, porque no podía ser juez y parte de esos delitos.

Sin embargo los problemas del sector salud son mucho más graves, tanto en el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, como en la concepción de ésta como servicio que genera ganancias y no como un derecho fundamental de los colombianos.

El robo y despilfarro a las arcas públicas en Salucoop no se frenó con la interventoría por parte de la Superintendencia de Salud, en cabeza de Guillermo Grosso, quien al llegar a Saluccop disparó el derroche de recursos en gastos suntuarios, beneficios personales y familiares, ostentosas parrandas, desvíos de dineros y nóminas paralelas. Así, la cura resultó peor que la enfermedad.

Cuando se liquida a Salucoop, miles de empleados sin responsabilidad alguna en la corrupción fueron despedidos sin siquiera recibir su último sueldo, mientras que a los funcionarios administrativos

cercanos a su círculo directivo se hicieron merecedores a cuantiosas indemnizaciones.

La atención de los 5,3 millones de afiliados de Salucoop, se traspasó a Cafesalud, que sólo atendía a 1,2 millones de afiliados. Ese traslado se hizo sin aumentar la infraestructura ni las nóminas. Por tanto, si antes la atención era muy deficiente, ahora es un completo caos, tanto que se convierte en masacre.

El problema es que la desatención en salud es un crimen, porque la gente se muere, por la irresponsabilidad de los empresarios inescrupulosos y del Estado que cohonesto con esos negociados. Mientras los pícaros se enriquecen, al pueblo trabajador lo siguen matando en las puertas de las clínicas, al aplicarle el paseo de la muerte.

Con el mayor descaro, Guillermo Grosso pasó de ser el interventor de Salucoop a presidente de Cafesalud, llevando consigo a sus más cercanos compinches y toda la cadena de acciones delictivas. Esto contó con la venia de altos funcionarios y políticos entre ellos el Ministro de Salud Alejandro Gaviria, el súper intendente de salud Norman Julio Muñoz y el senador de la U Roy Barreras.

Ante la incapacidad de Cafesalud para responder por sus obligaciones, ahora se plantea liquidarla, sin brindar ningún tipo de alternativa a los 6,5 millones de usuarios ni al resto del agonizante pueblo.

¿Cuándo será que la parapléjica justicia alcanzará a estos criminales que trafican con la salud?

La privatización de la salud

El invento de las EPS fue uno de los tantos golpes asestados al país por parte del senador Álvaro Uribe Vélez; con la vergonzosa ley 100 de 1993. Con la excusa de pretender mejorar el funcionamiento, calidad y atención de los establecimientos médicos públicos, se entregó la salud de los colombianos a las manos privadas, quebrando los hospitales públicos. En los gobiernos de Álvaro Uribe, la salud quedó en manos de testaferros de los narcoparamilitares.

El Estado se limitó a consignar los aportes económicos por cada ciudadano afiliado, a los establecimientos privados, sin ningún seguimiento ni control a la atención prestada.

De esta manera las EPS se convirtieron en una captadora de recursos con millones de afiliados, pero sin que los multimillo-

narios aportes se vieran reflejados en la atención, calidad de los tratamientos o acceso a los medicamentos.

La salud se convirtió en un negocio muy rentable, que concentra una cartera de servicios de cerca de 14 billones de pesos, el doble de Isagen. Pese a que hoy la Superintendencia Nacional de Salud ordenó medida de vigilancia especial a otras 13 EPS, la corrupción es sólo una, de las más graves enfermedades de la salud colombiana.

Es la visión neoliberal, que elimina la responsabilidad del Estado para garantizarle a las y los colombianos todos los derechos fundamentales como la salud, y, la convierte en un servicio con fines de lucro. Así, la salud queda en estado terminal.

El gobierno de Santos sancionó la Ley Estatutaria de la Salud en febrero de 2015, con grandes promesas de cambio estructural en el derecho a la salud. Pero luego de un año largo esto no

fue más que un anuncio rimbombante sin efectos reales.

El POS (Plan Obligatorio de Salud) sigue siendo la excusa perfecta de los empresarios para maximizar sus ganancias a causa de la muerte de los colombianos, ya que los tratamientos interrumpidos, el ibuprofeno como receta mágica ante cualquier enfermedad, la demora en los tiempos de atención y citas médicas, el paseo de la muerte, la restricción en los medicamentos y sus altos costos siguen siendo el diario morir de los afiliados a las EPS.

Ante este crítico panorama no queda más que la resistencia y la organización popular, no sólo de los trabajadores del sector salud, sino de todo el pueblo. Es el momento de inundar las calles, con la indignación de todos los colombianos, para frenar la muerte por la codicia de unos pocos y exigir la salud como derecho fundamental.

Carta a Nairo Alexander Quintana Rojas,

El Conquistador de Europa

Lo Saludamos con un abrazo caluroso y lleno de mucho cariño.

Es grato para nosotras y nosotros felicitarlo por el gran triunfo en la vuelta España, somos admiradoras de su habilidad y profesionalismo en el ciclismo y hemos vibrado con mucha emoción en todas las competencias, donde Ud. ha enaltecido el sentimiento patriota y ha rescatado el orgullo de ser colombiano, tan envilecido por las mafias narcoparamilitares que nos gobiernan. Nos conmovimos hasta las lágrimas, cuando sonó el himno nacional y Ud. y Esteban Chávez estuvieron en el podio de los ganadores.

Reconocemos sus años de dedicación, disciplina, sacrificio y entrega al deporte, esto ha hecho de su persona un gran ciclista lleno de humildad, coraje y valentía. Del seno de una familia campesina del municipio de Combita, Boyacá, donde aprendió la sencillez y el indoblegable espíritu de superación; desde muy joven se ha destacado como excelente deportista en las rutas de alta montaña, junto al trabajo campesino para ayudar al sostenimiento de la casa, debido a la difícil situación que afronta el campo y la desigualdad social que vivimos en Colombia.

Todas sus proezas deportivas, lo han convertido en uno de los principales embajadores de Colombia, se ha vuelto un símbolo para la juventud y despierta la admiración de todo el continente, que



se solidariza con sus esfuerzos al enfrentarse a los principales ciclistas del mundo y salir triunfador.

La tarea de representar el país, no es nada fácil, pues a Uds les ha tocado sobresalir con el esfuerzo propio y sin la ayuda gubernamental. Sin embargo, cada vez que un deportista triunfa en el exterior, los presidentes de turno, salen en la televisión a sacar pecho y a apropiarse del sacrificio y del sudor ajeno,

Existe una dura historia, detrás de cada deportista exitoso que le ha tocado guerrear con la vida para llegar a las grandes ligas y competir en nombre del país. No existe una política estatal de estímulo y apoyo al

deporte, faltan recursos, personal técnico y la infraestructura básica necesaria. Por eso, la mayoría de ustedes tienen que pasar por una compleja cadena de intermediarios privados que los explotan. Así, el deporte que tanto reconocimiento, dinero y alegría le ha dado a Colombia, termina enriqueciendo principalmente a unos habilidosos empresarios y a una corrupta burocracia.

María Isabel Urrutia, otra deportista del pueblo humilde, tiene el doble mérito de haber ganado la primera medalla de oro para Colombia en las olimpiadas del 2.000 y de haber presentado en el parlamento la ley que impuesta con el 4 por ciento a la telefonía celular (3

por ciento para el deporte y 1 por ciento para la cultura). Así, se obliga a destinar una asignación presupuestal, que desafortunadamente no le llega a los deportistas, pues una gran tajada se la roban los funcionarios.

También es una injusticia, que sean abandonados los grandes deportistas, que desgastaron su salud y sus vidas dándole triunfos al país, y luego no reciban por lo menos una pensión digna. Se han visto casos donde han terminado inmersos en la crisis laboral que golpea a las y los ciudadanos, deambulando o trabajando en condiciones miserables y muriendo en la indigencia.

Por lo anterior, el Ejército de Liberación Nacional hemos venido proclamando que se necesita una paz con transformaciones y cambios para el país y hacemos énfasis que es indispensable que la sociedad, sobre todo la excluida del poder, participe en el proceso de paz, ya que los cambios se logran en un proceso de construcción, de lucha y movilización por la paz, debe comenzar desde ahora y no posteriormente a un cierre de negociación. Hacemos la invitación al sector deportivo y sobre todo a quienes la han

sufrido y hoy se destacan, para que participen activamente de este Gran Diálogo y proceso de paz entre el gobierno, el pueblo y nosotros.

Debemos conquistar que el deporte, la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, la recreación, sean derechos que el Estado le garantice a todas y todos los colombianos.

Para ir cerrando esta fraternal carta, también conmemoramos y felicitamos a las grandiosas personas como Catherine Ibargüen, Mariana Pajón, Óscar Figueroa y demás deportistas que conquistaron medallas en las recientes olimpiadas y paraolimpiadas de Río 2016, también a quienes triunfan en los diferentes torneos mundiales, como la nómina de lujo que barrió en los mundiales de patinaje en China; todas y todos nos hacen emocionar el corazón con pasión, llanto y alegría.

Me despido con el gran placer de haberle escrito al Gran Super Nairo estas sinceras palabras y la felicidad de saber que Colombia está llena de grandes triunfadores, que pueden aportar mucho a este país en la construcción de una paz con justicia social.





El 36º Aniversario del Nacimiento del

Frente Domingo Laín

El 14 de septiembre de 1980, el Frente Domingo Laín Sanz, hace su aparición pública con la toma de Betoyes, un corregimiento del municipio de Tame, Arauca. Son 36 años de historia consecuente, siempre junto al pueblo, acompañando sus luchas y sueños libertarios, confrontando el interés voraz de las compañías multinacionales y la acción represiva de las fuerzas estatales. Hoy, esa guerrilla madre ha profundizado sus raíces en todo el oriente colombiano.

A continuación registramos el accionar político-militar más destacado en desarrollo del Paro Armado:

PARTE DE GUERRA

- ☑ Septiembre 9 de 2016. En el municipio de Saravena departamento de Arauca unidades del Frente de Guerra Oriental (FGO) en acción de comando, lanza granada a una garita de la policía. Resultados, 1 policía herido y varias motos dañadas.
- ☑ Septiembre 11 del 2016. En Arauca capital, unidades del FGO colocan carga explosiva a una cámara de seguridad hacia la salida para caño limón, la cámara queda total mente destruida.

- ☑ Septiembre 11 de 2016. En el municipio de Arauquita, unidades del FGO lanzan granada a una garita del puesto de policía resultado 1 policía herido.
- ☑ Septiembre 12 del 2016. Sobre la vía Tame Zúama, unidades del FGO queman un bus de la empresa libertadores por desacatar la orden de paro. No se causó daño a los ocupantes.
- ☑ Septiembre 12 al 15 de 2016. Unidades del FGO realizan 27 acciones de propaganda armada y bloqueos sobre las vías terrestres.
- ☑ Septiembre 15 de 2016. En la vereda Caño claro municipio de Fortul departamento Arauca, Cae patrulla del ejército gubernamental en campo minado.
- ☑ Septiembre 15 de 2016. En el municipio de Saravena departamento Arauca, unidades del FGO en acción comando, lanzan granada a una garita del puesto de la policía, resultados, un policía herido.
- ☑ Septiembre 15 de 2016. En la vereda El trapiche, municipio de Arauquita departamento de Arauca El ejército gubernamental cae en campo minado.
- ☑ Septiembre 15 de 2016. En la vereda Caño colorado, municipio de Fortul departamento de Arauca, unidades del FGO accionan campo minado al paso de una patrulla del ejército.
- ☑ Septiembre 15 a las 8 y 30 de la noche de 2016, Unidades del Frente de Guerra Oriental desarrollan acción comando contra la Fuerzas Especiales del ejército gubernamental en el Municipio Arauquita vereda El oasis, con los siguientes resultados:
Un soldado muerto.
Un soldado herido.
Recuperado un fusil Galil 5.56, un cargador para fusil, una mira telescópica y 35 cartuchos calibre 5.56.

Nuestra fuerza se replegó sin novedad.

DENUNCIAMOS ante los organismos de Derechos Humanos que luego del combate, el ejército como retaliación, asesinó dos campesinos y los presentó como "guerrilleros muertos en combate"



CHOCÓ,

Entre la Mentira y El Abandono

El Frente de Guerra Occidental del ELN saluda al pueblo del Chocó y al pueblo de Colombia.

El poder que siempre ha combatido los pueblos del mundo para afianzar beneficios, no tiene límites morales ni éticos para hacerlo.

En toda guerra, las comunicaciones se han convertido en sofisticadas arma de los poderosos, para combatir a los pueblos. Por ello los Grandes Medios son fuertes empresas que hacen parte del poder, y, sus trabajadores, como en toda empresa privada, deben trabajar como les mandan o les cuesta el empleo en el menor de los casos. La capacidad para informar no es imparcial, está al servicio de los dueños de los Medios.

Por lo anterior, cuando desmentimos informaciones de los medios, no buscamos distancias con los comunicadores a quienes consideramos y respetamos. Nuestros cuestionamientos van a los dueños de los grandes Medios de información y a quienes los dirigen.

Desafortunadamente el periodismo investigativo en Colombia es muy escaso, no es del interés de las empresas de la información, sobre todo cuando se trata de asuntos de la política,

porque regularmente los dueños de dichas empresas son los mismos dueños del país.

Desde este inmenso litoral Pacífico, abandonado, convulsionado y apeteído por los grandes capitales que intentan con toda fuerza que la insurgencia colombiana desaparezca y deje de estorbarles a sus intereses saqueadores.

El Frente de Guerra Occidental del ELN, se permite hacer nuevas aclaraciones difundidas al país en los últimos meses del año en curso por los Grandes Medios:

1- Son mentiras que: “producto de una confrontación del ELN en contra de los paramilitares los Urabeños, se desplaza la comunidad de Boraudo cuyos habitantes son Afros”

Este sitio queda entre los Municipios de Yuto y Lloró, a escasos 10 minutos en carro, de la escuela de Policía Chocó, con sede en Yuto.

¿Realmente qué sucedió?:

Los paramilitares entraron al municipio de Lloró a asesinar pobladores, a quienes consideran colaboradores de la insurgencia. Algunos pobladores repelieron el ataque paramilitar y dieron de baja a un paramilitar e hirieron a dos. Los



paramilitares se replegaron y el ejército nacional que estaba bastante cerca de allí, corrieron en su apoyo produciéndose un choque entre fuego amigo, que duró más de 3 horas en predios de la comunidad Boraudó, produciendo pánico en sus pobladores.

2- Son mentiras que: “Amenazas del ELN, sobre los habitantes del municipio del Río Quito, genera situación crítica;

¿Realmente qué sucedió?

En el municipio del Río Quito, el 5 de abril, a las 6:45 pm, emboscamos al grupo de policía militarizada, que venía extorsionando a los mineros, a quienes amenazaban con quemarles sus maquinarias de trabajo. En el combate murió un policía y quedaron tres heridos. De nuestra parte tuvimos un compañero herido.

Este municipio está en la periferia de Quibdó a orillas del Río Baudó, los militares trabajan de la mano con las bandas paramilitares para “ahuyentar a los guerrilleros”

3- Son mentiras que: “La comunidad llamada Puerto Limón, sobre el Río Cucurupú, afluente del Río Sanjuan está sitiada por el ELN, impidiéndole la caza, la pesca y sus actividades cotidianas”

¿Realmente qué sucedió?

El día 18 del mes de agosto, sobre dicha comunidad fue lanzada una operación militar, descargando desde helicópteros, abundantes patrullas militares, luego que varios aviones militares sobrevolaran la región, Esta situación causó alarma entre las menos de medio centenar de familias que viven allí en el más completo abandono del Estado,

que sólo llega con los militares en estas operaciones punitivas.

4- Son mentiras que: “fuerte Confrontación entre guerrilleros del ELN y un grupo paramilitar del Clan del Golfo que genera desplazamiento en la frontera con Panamá en el tapón de Darien.

¿Realmente qué sucedió?

Sobre el río Panguí, Cerca al Municipio de Pizarro, unidades del Frente de Guerra Occidental emboscaron un grupo paramilitar que se movilizaba por el río Panguí, que arrojó como resultado 12 paramilitares muertos que se desplazaban por dicho río, nuestra fuerza no tuvo novedades.

ACLARACIÓN IMPOTANTE:

El Frente de Guerra Occidental no tiene ningún reclamo ni ha

causado ninguna presión económica al señor José Eduardo Alos Elago, rector de la comunidad de Santamaría de Pángala ni le ha hecho ninguna llamada telefónica.

En dicha región hemos intercambiado con dirigentes de Marcha Patriótica, hemos sido explícitos en que no tenemos inconvenientes para que ellos desarrollen su acción política y nuestra solicitud ha sido en el sentido de establecer coordinaciones para evitar dificultades innecesarias.

Por todo lo anterior, nos ha sorprendido el pronunciamiento público de COMPI-Marcha Patriótica del pasado 11 de septiembre, porque no se ajusta a la verdad.

Frente de Guerra Occidental del ELN

Septiembre 17 de 2016

